

Gregorio Valero Jordana ★

La Secretaría General de la Asamblea de Madrid (1990-1992)

*A la memoria de Cristina Álvarez,
funcionaria de la Asamblea*

Me correspondió, y el término describe perfectamente la realidad, ser Secretario General de la Asamblea de Madrid durante un breve período: del 19 de septiembre de 1990 al 8 de abril de 1992, que discurrió desde el final de la segunda legislatura (junio 1987-1991) hasta el comienzo de la tercera (junio 1991-1995), bajo la Presidencia, respectivamente, de Rosa Posada Chapado y Pedro Díez Olazábal.

Aunque haya sido el Secretario General de duración más breve en el cargo de entre los que hasta ahora ha tenido la Asamblea de Madrid, fui el primero en haber trabajado previamente durante varios años, más de cinco, como Letrado de la Cámara. Se me permitirá, por lo tanto, dedicar algunas líneas a esa primera época, que comenzó sólo dos años después de la constitución inicial de la Asamblea.

Mi llegada al Caserón de San Bernardo en julio de 1985 se debió a la iniciativa que la Administración del Estado tuvo de fomentar el traspaso voluntario de un cierto número de funcionarios a las Comunidades Autónomas, y al interés que Ramón Espinar Gallego, primer Presidente de la Asamblea, prestó a mi candidatura. Como es habitual, aunque procedía del Ministerio de Agricultura, no se me adscribió a dicha Comisión, sino que se me envió a la de Presupuestos y Hacienda, que, en la I Legislatura, llevaba una vida relativamente plácida, en buena parte debido a la mayoría absoluta que el PSOE había obtenido en las elecciones de 1983. Ello me permitió ir entrando progresivamente en contacto con mi nuevo trabajo.

Puesto que cada Letrado tenía que llevar varias Comisiones, mi adscripción a Presupuestos fue completada con la de Educación y Cultura y

* Secretario General de la Asamblea de Madrid entre el 19 de septiembre de 1990 y el 8 de abril de 1992. Miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Letrado en servicios especiales de la Asamblea de Madrid.

la de Seguridad Ciudadana (creada tras el incendio de la discoteca en la calle Alcalá). Posteriormente, conforme ganaba en antigüedad, fui cambiando algunas de estas Comisiones y pasé, en diversos momentos, por las de Política Territorial, Asuntos Europeos, y Medio Ambiente. Si no recuerdo mal, el hecho de ser el de menor edad motivó, en determinado momento, mi adscripción a las Comisiones de Igualdad de la Mujer y de la Juventud. Además, a partir de 1986, me convertí en el Director de la naciente Biblioteca de la Asamblea.

La I Legislatura fue básicamente un período de constitución y rodaje en el que los Diputados y Grupos iban familiarizándose progresivamente con el funcionamiento de la Asamblea y con los diferentes procedimientos e iniciativas parlamentarias. La actividad legislativa fue básicamente de carácter fundador, adoptándose las principales leyes institucionales, la tramitación de la mayoría de las cuales dependía de la Comisión de Presidencia, a la que José Maldonado Samper estaba adscrito como Letrado.

Mis dos años de trabajo durante esa I Legislatura consistió en la tramitación de los Presupuestos de 1986 y 1987, en la colaboración en algunos procedimientos legislativos relacionados con la ordenación del territorio, así como en el seguimiento de las Comisiones a las que estaba adscrito, cuyas reuniones normalmente tenían como orden del día la comparecencia del Consejero o alto cargo correspondiente. Merecen ser destacadas, por su originalidad en la práctica parlamentaria española, las comparecencias anuales de los Consejeros y altos cargos para explicar el proyecto de Presupuesto de sus Consejerías y organismos.

En lo que se refiere a la emisión de informes escritos, la tarea consistía básicamente en las consultas provenientes de la Mesa de la Asamblea y relativas, en su mayor parte, a dudas sobre la admisibilidad de determinadas iniciativas de Diputados y Grupos. La línea conductora de mis informes fue favorecer el debate parlamentario y evitar que la Mesa se excediera en sus atribuciones de admisión a trámite, interpretación que el Tribunal Constitucional ha confirmado en repetidas ocasiones, la primera de ellas en su Sentencia 161/1988, de 20 de septiembre, contra un acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha relativo a una solicitud de información y la más reciente en su Sentencia 177/2002, de 14 de octubre, contra dos acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados referentes a ciertas solicitudes de comparecencia de Presidentes de empresas públicas privatizadas.

Una parte de mi tiempo la empleé en relanzar la Biblioteca, que partía prácticamente de cero, y en establecer contactos con los otros Parlamentos autonómicos con el fin de comparar la evolución de las distintas prácticas parlamentarias. Por razones personales, los contactos fueron más intensos con los Parlamentos vasco (especialmente con su Letrado Javier Blanco) y catalán y con las Cortes de Aragón y la Asamblea de Murcia.

El inicio de la II Legislatura no introdujo cambios importantes en mis tareas como Letrado, aunque la nueva composición de la Asamblea, con la aparición del CDS y la pérdida de la mayoría absoluta del PSOE, hizo que el trabajo de la Comisión de Presupuestos ganara en importancia y

dificultad. Prueba de ello fue una tramitación del proyecto de Presupuestos para 1988 llena de novedades. Por primera vez, la oposición consiguió que sus enmiendas fueran adoptadas y cambiar así un cierto número de partidas presupuestarias. Ciertos fallos en la redacción de las cerca de mil enmiendas, para cuyo examen previo no había nunca más de un día, condujeron a la aprobación de un Presupuesto desajustado, problema que se resolvió semanas después mediante un procedimiento (decisión del Consejo de Gobierno previo informe de la Comisión de Presupuestos) incluido en la propia Ley.

Como consecuencia de dicha experiencia, la tramitación de los Presupuestos de los ejercicios siguientes fue mejorada sustancialmente, bajo la dirección de Gabriel Usera González, el Presidente de la Comisión, mediante la adopción de enmiendas-tipo, un mayor control en la fase de admisión de enmiendas, y el debate únicamente de las enmiendas de creación o aumento de partidas, con el consiguiente decaimiento o aprobación de las correspondientes enmiendas de supresión o minoración de partidas. Sin embargo, mi consejo de que no se aceptaran las enmiendas parciales que consistían en el rechazo de toda una Sección no fue aceptado y se siguieron produciendo ciertas situaciones peculiares, más propias de un debate de totalidad.

Además, la oposición fue introduciendo en cada Ley de Presupuestos una mayor intervención de la Asamblea en las decisiones relativas a la ejecución y modificación del Presupuesto. Fruto de una de esas disposiciones fue la creación en la Asamblea de la Oficina de Control Presupuestario, que tenía como finalidad suministrar información a los Diputados sobre el estado de ejecución del Presupuesto de la Comunidad.

En 1988 representé a la Asamblea en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Nación contra la modificación de las retribuciones del personal de la Comunidad aprobada en la Ley de Presupuestos para 1988 (asunto 544/1988). Años después, y gracias a Internet, leo la sentencia estimatoria del recurso que, con fecha 22 de mayo de 1997, el Tribunal Constitucional dictó en este asunto. La sentencia confirma una jurisprudencia que ya apuntaba en 1987 y a la que yo había hecho referencia cuando las disposiciones, luego recurridas, se debatieron en la Comisión de Presupuestos.

La crispación política de la II Legislatura fue incrementándose en 1989, primero con la moción de reprobación del Consejero Eduardo Mangada en abril, luego con la moción de censura en junio, para terminar con el debate sobre orientación política general en noviembre. Todo ello salpicado con los primeros episodios de transfuguismo político en la Asamblea de Madrid. El año 1989 fue en la Cámara un año duro. Los debates produjeron un aumento del número de consultas a los Letrados sobre cuestiones que incidían directamente en la configuración del «régimen político» de la Comunidad. Recuerdo, con cierta amargura, que en algunas ocasiones, el debate político fue injustamente crítico con los Letrados de la Cámara.

El cierre de esa evolución de las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo madrileños sería la adopción, en mayo de 1990, de la Ley reguladora

de la facultad de disolución de la Asamblea de Madrid por el Presidente de la Comunidad. En un informe de mayo de 1989, yo había concluido que dicha facultad sólo se podía reconocer mediante la previa reforma del Estatuto. Veremos más adelante cómo la adopción de esta ley produjo unos efectos imprevistos.

Entretanto, el Consejo de Gobierno retiró, a principios de noviembre de 1989, el proyecto de ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad, sobre el que la Comisión de Presupuestos y Hacienda había adoptado un Dictamen que introducía importantes cambios en el texto presentado en 1988 por el ejecutivo.

En aquella época, tuve la fortuna de hacer una interrupción en el trabajo. Mi boda en Sevilla el 9 de diciembre de 1989 me permitió distanciarme del ambiente tenso de la Asamblea. El regreso a la rutina laboral coincidió con mi traslado al edificio de Amaniel, donde continúe sumergido entre las cuestiones presupuestarias, incluida la tramitación de los Presupuestos de 1990, y mi creciente interés por el Derecho comunitario, con el que había reiniciado mis contactos en 1987. También fue el momento en que, por primera vez, fui adscrito a una Comisión de Investigación: la constituida sobre el ACTUR-Tres Cantos, donde enseguida se evidenciaron las numerosas limitaciones con que dichas Comisiones debían funcionar cuando se creaban en el seno de un Parlamento autonómico.

Sin embargo, la tranquilidad es siempre un estado transitorio. La dimisión, en pocos meses, de mis dos predecesores en el cargo de Secretario General terminó con mi inesperado nombramiento para el puesto el 17 de septiembre de 1990. A petición mía, la Presidenta propuso a la Mesa de la Cámara el nombramiento como Director de Gestión Parlamentaria y Comisiones de Alfonso Arévalo Gutiérrez.

Mi primera prioridad respecto a la Administración de la Cámara fue cubrir las plazas vacantes y especialmente las existentes en el Cuerpo de Letrados. Desgraciadamente la primera oposición se celebró con excesiva rapidez y el resultado fue que las dos plazas quedaron vacantes. Una segunda convocatoria, publicada inmediatamente, permitió cubrir una plaza y constituir una lista de opositores, que habían aprobado algún ejercicio, para su nombramiento como Letrados interinos. Mi segunda experiencia como miembro de Tribunales de oposiciones (la primera había sido en el Ministerio de Agricultura) me reafirmó en mi convicción de lo inadecuado de este sistema de selección de personal, que obliga a los Licenciados a aprender de memoria varios centenares de temas sobre cuestiones dispares, que, en muchas ocasiones, no aplicarán nunca en su trabajo. Eché muchas veces en falta que la Administración no dispusiera de un sistema de Academias, donde poder seleccionar el personal.

Entretanto, los cuatro Letrados con los que contaba la Asamblea duplicamos nuestros esfuerzos para cubrir el trabajo parlamentario y administrativo. La situación de penuria de personal aconsejó que me hiciera cargo, de nuevo, de la Comisión de Medio Ambiente, lo que me permitió acompañar en 1991 la tramitación de dos futuras leyes: la de protección de la fauna y flora sil-

vestres, y la de protección del medio ambiente. Por azares del destino, y diez años después, tuve que volver a examinar esta última ley cuando, ya en el Servicio Jurídico de la Comisión Europea, presenté el recurso contra el Reino de España por la incompleta transposición del Anexo II de la Directiva 85/337/CEE sobre evaluación de impacto ambiental (Sentencia de 13 de junio de 2002, asunto C-474/99). Desgraciadamente, la tramitación de estas leyes se hizo mediante un procedimiento poco acorde con el principio de publicidad que debe regir el debate parlamentario: se negociaba en la ponencia un texto y el informe de la misma era aprobado, sin discusión, como dictamen de la Comisión, que era, a su vez, aprobado sin debate por el Pleno. Mis protestas jurídicas fueron amablemente escuchadas.

Por otra parte, la retirada el 10 de diciembre de 1990 por el Consejo de Gobierno del proyecto de ley de Presupuestos para 1991 (un día antes de la sesión plenaria en la que se iban a debatir las enmiendas a la totalidad presentadas por los Grupos Popular y del CDS), dio lugar a una serie de comparecencias ante el Pleno. La primera, del Consejero de Hacienda, tuvo lugar el 19 de diciembre y fue considerada insuficiente por tres Grupos de la oposición, que exigieron la comparecencia del Presidente de la Comunidad en un nuevo Pleno convocado para el día 26 de diciembre. Este enfrentamiento no hacía sino reproducir un debate que se había repetido numerosas veces a lo largo de los últimos años: si el Consejo de Gobierno podía decidir libremente quién de sus miembros le representaba en un punto determinado del orden del día, aun en el supuesto de que la Cámara hubiera decidido la comparecencia del Presidente de la Comunidad.

La mayoría del trabajo relacionado con las cuestiones administrativas había que dedicarlo a solucionar pequeños problemas de relaciones personales y a intentar poner un cierto orden en la negociación con los sindicatos. Un reducido número de funcionarios que, excediendo las verdaderas funciones sindicales, intentaba patrimonializar la organización de la Asamblea llegó a convocar una huelga salvaje, que fracasó. Comisiones Obreras, el sindicato que más en serio se tomaba la negociación sindical, manifestó su disconformidad con esta escalada de enfrentamientos. El resultado de esas tensiones fue que no se llegaron a debatir algunas cuestiones importantes, como la elaboración de un programa de formación del personal, que se quedó en el tintero a la espera de momentos más tranquilos (que nunca llegaron).

Gran parte de los problemas de la gestión administrativa provenían de la ausencia de una sede definitiva de la Asamblea, con espacio suficiente para que el trabajo de los Diputados y funcionarios se desarrollara de forma conveniente. Gracias a una cesión de uso del Ministerio de Educación, la Asamblea compartía el Caserón de San Bernardo con el Instituto de España y el Consejo Escolar del Estado. En el patio de la calle Amanuel, donde contábamos con un pequeño edificio para los miembros de la Mesa, tenían sus locales diversos organismos, entre los que recuerdo un sector del Conservatorio de Música, la Escuela de Práctica Jurídica y la oficina de becas del Ministerio de Educación. Junto a esta apretura, existía también la situa-

ción contraria de dispersión: dos servicios de la Secretaría General estaban alojados en pisos cercanos y, además, contábamos con otro piso para el Grupo Mixto y el Consejo Asesor de RTVE y una planta de otro edificio para los otros Grupos Parlamentarios. La gestión de todo ello era una fuente innumerable de problemas, a la que los funcionarios de la Cámara y los empleados de los Grupos hacían frente con, lo que todavía hoy me parece, una extraordinaria dosis de paciencia (y resignación). Las dificultades para informatizar en red los servicios eran insuperables o su coste muy elevado.

La situación se complicó cuando, con motivo de unas grietas y de las subsiguientes calas en noviembre de 1990, se descubrió que las vigas de madera del antiguo y anciano edificio no se encontraban en buen estado. Un periódico nacional encontró un título impactante, copiado de una película estadounidense de gran éxito: «esta Asamblea es una ruina». Allí comenzó una serie de obras parciales y apuntalamientos que se prolongaron durante meses, y que obligó a trasladar parte de los archivos y de los fondos de la Biblioteca. A pesar de que prensa señaló que las vigas «respiraron aliviadas», evidentemente el riesgo no había desaparecido y los problemas siguieron surgiendo periódicamente.

Una pausa en mi rutina diaria tuvo lugar con el viaje que hice a Estados Unidos en marzo de 1991, donde fui invitado, gracias a la intermediación de José Luis de María Peña, entonces Letrado Mayor de las Cortes de Castilla y León, por la Secretaría de Estado de ese país para entrar en contacto con el sistema político estadounidense. Fueron dos semanas de reuniones intensas, gratamente compartidas con Luis Aguiló Lucía, Letrado Mayor de las Cortes valencianas, José Antonio García Hernández, Secretario General de la Asamblea de Extremadura, y Manuel Jiménez Abad, Letrado Mayor de las Cortes de Aragón, asesinado por ETA diez años después, en mayo de 2001. El viaje sirvió no sólo para familiarizarnos con el funcionamiento del sistema político estadounidense, de los distintos poderes legislativos y del sistema federal, sino también para comprobar, contra lo que es opinión común, los importantes recursos personales y materiales de la Administración en dicho país.

La proyección hacia el exterior de nuestro trabajo en la Asamblea mejoró gracias al nuevo empuje dado, a mediados de 1991, a la Asociación Española de Letrados de Parlamentos (entonces de Parlamentos Territoriales), para lo que las Cortes de Aragón se encargaron de organizar una reunión los días 6 y 7 de mayo. A pesar de mi resistencia a ocupar puesto alguno en la Asociación, ya que la iniciativa no había sido bien recibida en determinados sectores de la Asamblea de Madrid y, asimismo, porque el fin próximo de la legislatura no garantizaba mi continuidad en el cargo de Secretario General, los asistentes a la reunión insistieron en que me ocupara de la Presidencia. Éste es otro de los proyectos que no vi madurar, pero que, afortunadamente, ha conseguido salir adelante, con gran éxito, gracias al esfuerzo de otros compañeros, entre los que cabe mencionar a Francesc Pau, Letrado del Parlament de Catalunya y Secretario de la Asociación, cuya sede fue merecidamente fijada en el Parlament.

El final de la II Legislatura se caracterizó por un relativo apaciguamiento del debate legislativo, que permitió la adopción de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid (tras la presentación de un nuevo proyecto), de determinadas leyes medioambientales, algunas ya mencionadas, de la Ley de Carreteras, y de la Ley del Consejo Económico y Social. Al mismo tiempo, aumentó la presentación de proposiciones de ley y hubo una importante proliferación de Comisiones de Investigación, que contaron con el eficaz asesoramiento de Alfonso Arévalo Gutiérrez: a la Comisión ACTUR-Tres Cantos, se añadieron, que yo recuerde, dos sobre el caso Exter y Vitrubio 30.

Una de las cuestiones a las que más tiempo hubo que dedicar a finales de 1990 y principios de 1991 fueron las modificaciones legislativas necesarias para poder celebrar elecciones autonómicas y locales en mayo de 1991, y evitar su deslizamiento hacia el mes de julio. Para alcanzar dicho objetivo hubo que modificar, casi a matacaballo, la Ley orgánica del régimen electoral general (LOREL), el Estatuto de Autonomía de Madrid y su Ley electoral de 1986. Como dijo la prensa, todo un «encaje de bolillos», que, además se vio complicado porque los redactores de la proposición de ley de modificación de la LOREL no tuvieron en cuenta que la Comunidad de Madrid había aprobado una ley habilitando a su Presidente a decidir la disolución de su Asamblea: el texto adelantaba las elecciones de aquellas Comunidades Autónomas cuyas Asambleas no podían ser disueltas anticipadamente por el Presidente. Redacté un informe explicando el problema y dando soluciones. El informe, como era de esperar, llegó a manos de la prensa y, durante algunos días, afortunadamente pocos, los medios se entretuvieron en señalar que el Secretario General de la Asamblea había descubierto un «agujero» jurídico. Como el roto no era difícil de arreglar, una vez superado ese pequeño problema mediante la modificación del proyecto en el Senado, todo se fue desarrollando sin mayores dificultades. La defensa ante el Congreso de la proposición de ley de reforma del Estatuto por la Presidenta de la Asamblea tuvo lugar el 5 de febrero de 1991.

Estas y otras cuestiones fueron discutidas en la reunión, organizada por el Parlament de Catalunya, que los Presidentes y Secretarios Generales/Letrados Mayores de los Parlamentos autonómicos celebraron en Barcelona en febrero de 1991.

No obstante, en términos generales, el cambio de legislatura, de la II a la III, también fue precedido del habitual período de tranquilidad, debido a la preparación y desarrollo de la campaña electoral, que comenzó oficialmente el 10 de mayo de 1991. A pesar de que la II Legislatura terminaba el 9 de junio, los Grupos llegaron al acuerdo de que el período de sesiones se cerrara a finales del mes de abril, con el fin de no perturbar el debate electoral. El último Pleno tuvo lugar el 4 de abril.

El broche inesperado de la Legislatura fue la defensa el 7 de mayo de 1991 ante el Congreso de los Diputados de la proposición de ley, presentada por la Asamblea de Madrid, sobre los beneficios fiscales relacionados con la designación de Madrid como Ciudad Europea de la Cultura para 1992.

La proposición, adoptada en diciembre de 1989, traía su origen de una iniciativa del Grupo Popular de la Asamblea presentada en marzo de 1989, y fue rechazada por el Congreso con el argumento principal de que ya se había adoptado la Ley 30/1990, de 27 de diciembre, sobre el mismo tema (aunque con el reconocimiento de menores beneficios fiscales). La delegación de la Asamblea estuvo finalmente compuesta por Luis Alejandro Cendrero, Consejero de Hacienda, y Gabriel Usera, Presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los que acompañé al Congreso. El debate recibió escasa atención en los medios de comunicación social.

Los resultados de las elecciones del 26 de mayo de 1991 dieron 47 Diputados al PP, 41 al PSOE y 13 a IU. El CDS desapareció como grupo bisagra entre el PSOE y el PP, volviéndose, en consecuencia, a una estructura de grupos similar a la de la I Legislatura, aunque la mayoría absoluta sólo se consiguió mediante la suma de los escaños del PSOE e IU.

Inmediatamente después de conocerse los resultados, la Asamblea tuvo que acometer una tarea doméstica pero delicada: organizar la distribución de los escaños entre los tres futuros Grupos Parlamentarios. El problema no tenía fácil solución, ya que el número de Diputados había aumentado de 94 a 101 y el plano rectangular y alargado del salón de sesiones no permitía muchas alternativas. El principal problema era trazar una frontera de forma que los Diputados de IU y del PP ocuparan sectores separados. La solución se alcanzó tras un duro debate entre representantes de los futuros Grupos Parlamentarios.

La sesión constitutiva se celebró, de acuerdo con el Decreto de convocatoria de elecciones, el 20 de junio de 1991, jueves, a las doce horas. Con la ayuda de Alfonso Arévalo, había preparado el guión de la sesión con el fin de que la Mesa de edad y la Mesa electa pudieran dirigir la sesión sin dudas ni sobresaltos, que no se produjeron. Recuerdo que algún periódico tildó a la sesión de «acto anodino». Francamente, no sé qué esperaban de una sesión constitutiva.

Bajo la afable dirección del socialista Matías Castejón Núñez, Presidente de edad, al que ayudaron los populares Alberto López Viejo y Pedro Luis Calvo Poch, Pedro Díaz Olazábal fue elegido Presidente con los votos del PSOE e IU, mientras el PP votaba por su candidato, Luis Eduardo Cortés Muñoz. Las votaciones subsiguientes para los demás miembros de la Mesa se produjeron conforme a esa pauta, que reflejaba el acuerdo que el PSOE e IU habían alcanzado. El Reglamento establecía que la votación de los tres Vicepresidentes se debía hacer de forma conjunta, mientras que la elección de los Secretarios exigía dos votaciones: una conjunta para los dos primeros y otra separada para el tercero. El resultado fue dos Vicepresidentes (segundo y tercero) y un Secretario (el primero) del PSOE, el Vicepresidente primero y el Secretario segundo del PP, y el Secretario tercero de IU. Dicho resultado, que daba al Grupo Popular, primer Grupo Parlamentario, sólo dos puestos de los siete de la Mesa, produjo ya las primeras tensiones.

Alguien consideró que la tensión política era razón suficiente para pasar de las palabras a la violación del orden público: durante la noche del 24

de junio un incendio provocado destruyó parcialmente los locales del Grupo de Izquierda Unida. Aunque los daños materiales fueron poco importantes y afortunadamente no hubo heridos, los hechos demostraron que, trece años después de la aprobación de la Constitución, había todavía grupos dispuestos a utilizar la violencia como arma política. El suceso demostró, además, la necesidad de encontrar una sede definitiva para la Asamblea y terminar con la dispersión y estrechez de los distintos locales que ocupábamos.

La III Legislatura continuó la fuerte confrontación política que había caracterizado a la II, con la diferencia de tener, en aquellos primeros momentos, una naturaleza bipolar. Aunque no recuerdo el resultado final de la discusión, la distribución de las Presidencias de las Comisiones, que se constituyeron el 9 de julio, fue uno de los puntos de fricción. La sesión de investidura, que tuvo lugar los días 10 y 11 de julio, fue la segunda ocasión tras la sesión constitutiva.

La tercera se produjo inmediatamente con la designación de los cinco Senadores que le correspondían a la Comunidad. Con el voto en contra de los miembros populares de la Mesa, ésta decidió proponer al Pleno que los Grupos Popular y Socialista tuvieran dos Senadores cada uno y que el quinto fuera de IU. La designación se realizó en el Pleno de 16 de julio, el último de este primer período de sesiones, en el que, además de ciertas proposiciones de ley a las que luego haré referencia, se nombró a los miembros de la Diputación Permanente y se crearon de nuevo las Comisiones Permanentes no legislativas de Seguridad Ciudadana, Desarrollo Estatutario (de Reforma del Estatuto en la anterior Legislatura), Vigilancia de las Contrataciones y Asuntos Europeos.

El 31 de julio de 1991 el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra dichas decisiones de la Mesa y del Pleno por considerar que las mismas no habían aplicado la fórmula proporcional d'Hondt, que hubiese dado al Grupo Popular un tercer Senador. La sensibilidad del tema y la sobrecarga de trabajo de los otros Letrados me llevó a hacerme cargo personalmente del asunto. El recurso fue rápidamente resuelto por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia 4/1992, del 13 de enero, desestimatoria del recurso por considerar que la Asamblea de Madrid no estaba constitucional ni legalmente obligada a la utilización de la regla d'Hondt y podía utilizar cualquier fórmula siempre que fuera proporcional.

A la vuelta del verano, concretamente el 11 de septiembre, la Mesa y los Portavoces fueron recibidos en audiencia por el Rey. Mi asistencia, en principio no prevista por el servicio de protocolo de la Asamblea, fue decidida en el último momento.

Sin poder entrar en detalles, limitación que el deber de reserva todavía me impone, recuerdo que las reuniones de la Mesa, y especialmente de la Junta de Portavoces, del comienzo de esta Legislatura eran normalmente más largas y tensas que las de la precedente. Siguiendo la práctica de las Legislaturas anteriores, las reuniones se celebraban, en principio, todos los martes.

La actividad legislativa de esos primeros meses fue escasa y, en buena parte, dirigida a modificar ciertas leyes con el fin de dar cumplimiento al pacto de investidura entre el PSOE e IU. Así se modificaron, mediante aprobación de las proposiciones de ley presentadas por IU, las leyes del Ente Público «Radio Televisión Madrid» y del Consejo Asesor de RTVE» con el fin de contar con una Presidencia estable del Consejo de Administración del Ente Público, cargo para el que fue elegido el Diputado José Antonio Moral Santín, reducir la mayoría necesaria para cesar al Director General y permitir que fuera la Asamblea la que fijara el número de miembros de ambos Consejos y su elección por mayoría absoluta. La modificación de la Ley del Ente Público se hizo mediante tres leyes separadas pero adoptadas simultáneamente, con escaso respeto de las reglas de técnica legislativa.

La Ley de Presupuestos para 1991, cuyo proyecto se había retirado en diciembre de 1990, fue aprobada en diciembre de 1991, al final del ejercicio, con el tiempo justo de evitar una serie de complicaciones contables. La Ley de Presupuestos para 1992, séptima de las leyes de este tipo que me correspondió tramitar en la Asamblea durante mis casi siete años de trabajo en la misma, fue promulgada el 30 de abril y publicada en mayo. En aquellos momentos yo ya estaba siendo testigo del verdor de la primavera en Luxemburgo y mi familia, aumentada con el nacimiento de mi primer hijo Ignacio, se había instalado provisionalmente en Sevilla.

Mi despedida de la Asamblea de Madrid en abril me permitió ver la finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre la compra de terrenos por RENFE en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, creada en diciembre de 1991 y a la que Alfonso Arévalo fue adscrito como Letrado. El dictamen de la Comisión, elaborado tras más de veinte reuniones y que concluía señalando la no participación de empleados o autoridades de la Comunidad de Madrid en dichas operaciones, quedó aprobado en el Pleno del 12 de marzo de 1992.

Sobre las cuestiones administrativas, estos primeros meses de esta III Legislatura se centraron en dos cuestiones: establecer un acuerdo estable con los sindicatos e impulsar la búsqueda de una sede definitiva. Para lo primero, se alcanzó, por vez primera, un acuerdo en el otoño/invierno de 1991, dirigido a terminar con el goteo de reuniones de negociación sobre temas menores y sin calendario alguno. Desgraciadamente, una vez alcanzado el acuerdo, su firma por los sindicatos se retrasó por razones mal explicadas. El recurrente problema de la sede recibió un fuerte impulso del Presidente de la Asamblea, con un primer debate con el Ministerio de Justicia sobre la posibilidad de que la Asamblea se mudara al palacio de Parcent, tras abandonarse la idea del traslado al antiguo hospital de Maudes, sede de la Consejería de Política Territorial. Cuando dejé el puesto de Secretario General, la búsqueda de edificio no había hecho sino comenzar: la Asamblea tendría que esperar todavía seis años para poder disfrutar de una sede definitiva.

Estas breves e inconexas, y seguramente incompletas, «memorias» no pueden cerrarse sin un capítulo de agradecimientos para aquellos compañeros y amigos que me ayudaron en mi trabajo en la Asamblea.

Los primeros recuerdos son para José Maldonado Samper y Fernando Álvarez de Miranda, los dos Letrados que me recibieron afablemente y con los que compartí despacho y preocupaciones durante varios años. El grupo de Letrados adscritos a Comisiones se completaría, en los años sucesivos y tras la partida de Fernando como Embajador a El Salvador, con la promoción interna de Fermín Vigón Sánchez, también procedente de la antigua Diputación Provincial de Madrid. La apertura hacia el exterior tardó en producirse, pero cuando tuvo lugar a principios de 1990, fue para recibir el importante refuerzo de Alfonso Arévalo Gutiérrez, del que ya he hablado.

En mi trabajo de Letrado tuve siempre el apoyo de Cristina Álvarez, fallecida prematuramente, de Águeda Rey, y de Montserrat Legido, quien me acompañó en mi breve «destierro» a principios de 1990 al edificio de la calle Amaniel. Paloma Dorado, la única secretaria adscrita al Secretario General de forma permanente, fue una eficaz colaboradora, siempre dispuesta a hacer frente a las numerosas sorpresas de la Casa.

El grupo fundador de la Biblioteca de la Asamblea, que tanto padeció la decrepitud del Caserón de San Bernardo, tuvo (y sigue teniendo) como pilar a Eduardo González-Santander y fue posteriormente reforzado con Francisco Ciudad Cantero. Gracias a ellos la Biblioteca se convirtió en un lugar donde poder trabajar con calma. Entre las taquígrafas de la Asamblea, recordaré a María del Carmen Fernández Esteras, eficiente, y casi permanente, Jefa de Sección en funciones del Diario de Sesiones.

El hecho de no mencionar a otros antiguos compañeros y amigos no se debe a que hayan caído en el olvido, sino a la simple obligación de ser breve. Cuento con su comprensión. A todos ellos mil gracias.

A mis Presidentes (de Cámara y de Comisiones) y a los demás Diputados, también mi agradecimiento por la paciencia que mostraron con este Letrado y Secretario General, que, de vez en cuando, les recordaba los límites que el Derecho impone (o que no impone) a la actividad política, así como los precedentes que, paulatinamente, iban constituyendo la práctica parlamentaria de la Asamblea de Madrid.